

Septiembre 29 de 1949

58ª REUNION — 51ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación,
y del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE, presidente provisional del
Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
ARRIETA, Alfredo J. L.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BAVIO, Ernesto F.
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
ENDEIZA, Victor W.
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRIQUEZ, Samuel
HERRERA, Ramón Esteban
LÁZARO, Juan Fernando de
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
MADARIAGA, Eduardo
MENDIONDO, F. Daniel
RAMELLA, Pablo A.
ROLDÁN, Ramón Ángel
SANCHEZ RECALDE, Luis N. A.
SOLER, Lorenzo (h.)
TANCO, Miguel A.
TEISAIRE, Alberto
VIVIANI, Rinaldo
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTE, CON AVISO:

BASALDÚA, Juan Carlos

AUSENTES, CON LICENCIA:

ANTILLE, Armando G.
GIAVARINI, Alejandro Bautista
MATHUS HOYOS, Alejandro
MOLINARI, Diego Luis
SCATAMACCHIA, Mauricio Antonio

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados:
 - I.—Mensaje del Poder Ejecutivo en el que comunica la promulgación de la ley 13.566, sobre prórroga de pensiones.
 - II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.
 - III.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.
 - IV.—Despachos de comisiones.
- 2.—Proyecto de ley del senador Viviani sobre construcción de un dique de embalse en Los Cauquenes (Quebrada de Huaco) y se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación, con fines de colonización, las tierras de Punta del Agua, San Juan.
- 3.—A moción del senador Bavio se fijan los asuntos a tratar en la sesión de la fecha.
- 4.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revisión, sobre ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 5.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza a permutar con el gobierno de la provincia de Jujuy un terreno ubicado en la ciudad del mismo nombre. Se aprueba.
- 6.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje

y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueban los convenios comerciales y de pagos con los gobiernos militares norteamericano, británico y francés, suscrito en Fraquefort. Se aprueba.

7.—Consideración del proyecto de comunicación del senador Amelotti sobre construcción de una línea férrea de Villa Dolores a Soto, provincia de Córdoba. Se aprueba.

8.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se substituye el inciso 3º del artículo 96 de la ley 11.281 (aduana). Se aprueba y queda convertido en ley.

9.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, sobre ratificación de decretos leyes relativos al Tratado Complementario de Límites Definitivos con Paraguay. Se aprueba y queda convertido en ley.

10.—Consideración del despacho de las comisiones de Agricultura y de Industria y Comercio en el proyecto de ley, en revisión, sobre fiscalización de medicamentos veterinarios. Se aprueba, con modificaciones.

11.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley, en revisión, sobre celebración, en 1950, del Año del Libertador General San Martín. Se aprueba, modificado.

12.—Consideración del despacho de la Comisión de Trabajo en el proyecto de ley, en revisión, por el que se modifica el artículo 2º de la ley 9.688 (accidentes del trabajo). Se aprueba.

13.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley de los senadores Cruz y de Lázaro, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en el departamento de Burruyacú (Tucumán). Se aprueba.

14.—Consideración del despacho de la Comisión de Justicia en el proyecto de ley, en revisión, por el que se crea un juzgado federal en la ciudad de La Plata. Se aprueba y queda convertido en ley.

15.—Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley del senador Basaldúa, sobre jubilación de los magistrados judiciales que hayan cesado en sus funciones por aplicación de una cláusula transitoria de la Constitución Nacional.

16.—Consideración del despacho de la Comisión de Transportes en el proyecto de ley, en segunda revisión, sobre concesión de pases a los no videntes para viajar en los transportes de pasajeros pertenecientes a la Nación. Se aprueba.

17.—Moción.

18.—Conferencia. Consideración del proyecto de ley del senador Mendiando, por el que se acuerda pensión a doña Antonia Paca Tomasetti de Cochía e hijos menores.

19.—Votación del asunto a que se refiere el punto anterior. Se aprueba.

20.—Integración de comisiones.

21.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

III.—Inserciones.

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de septiembre de 1949, siendo las 16 y 40, dice el

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1949.

A la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de acusar recibo de la nota de esa Honorable Cámara P.E.-V.-486, fechada el día 16 del corriente, por la que acompaña la ley 13.566, y lleva a su conocimiento que, por decreto 23.711 la ha promulgado el día de la fecha.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

José M. Freire.

II

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

En el proyecto de ley en revisión por el que se modifica y complementa la ley 12.999 sobre exhibición de películas argentinas. (A la Comisión de Industria y Comercio.)

—En el proyecto de ley en revisión sobre reglamentación de los partidos políticos. (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

bución del riego en la zona de influencia agrícola que el proyectado embalse entrará a servir.

Con esta obra de innegable beneficio para mi provincia se habilitará para la explotación agrícola adecuada, alrededor de 10.000 hectáreas en la zona de Punta del Agua, además de las 2.000 hectáreas de Huaco. Es superfluo destacar el valor que se agregará a las tierras de Punta del Agua, que por este mismo proyecto y con destino a fraccionamiento y venta para la colonización se dispone.

La configuración natural del terreno favorecerá la construcción del embalse que propicio, pues con un muro de aproximadamente 30 metros de longitud en la base y 70 en el coronamiento, con una altura de alrededor de 35 metros se puede cerrar una quebrada y obtener un embalse que ampare aproximadamente 150 millones de metros cúbicos, con destino al riego de más de 12.000 hectáreas como he dicho.

El embalse se llenará con las aguas provenientes de los desagües de la zona Norte de Jachal y que actualmente forman el río Huaco con un caudal medio de más o menos 2 metros cúbicos por segundo; de las crecientes pluviales que bajan por los ríos Los Pajaritos, Paslean y Huachi; los sobrantes del río Jachal que podrían derivarse en el dique nivelador del Pachimaco por el Canal del Norte, que ya está revestido y descargarlos por cualquier parte —ya que hay muchos lugares convenientes—, hacia el embalse.

Para utilizar el agua en Punta del Agua, convendría conducirla a través del valle de Huaco por medio de un canal revestido de aproximadamente 15 kilómetros (por ser terrenos muy permeables).

Las tierras beneficiadas con la obra de riego que se proyecta podrá ser expropiadas por el Poder Ejecutivo con la extensión que lo estimara conveniente, con fines de colonización y fraccionamiento, en las que por expresa disposición de la ley se dará prelación en las ventas a los actuales pobladores de la zona, persiguiendo la realización del inspirado propósito de nuestro presidente, de que la tierra no debe ser un bien de renta, sino de trabajo, se justifica la preferencia que la ley concede.

El régimen de la ley 13.264, de expropiaciones, entrará a jugar en la efectivización de esta ley, con todas aquellas disposiciones que no fueran modificadas especialmente, por esta que se proyecta.

Es interesante destacar que los 10.000.000 de pesos a invertirse en la construcción del embalse, al valorizar las tierras a las que ha de servir, cuya venta en colonización reglamentará el Poder Ejecutivo, restituirán al Estado los fondos públicos que para la ejecución de la obra se adelantará, y así lo prevé el artículo 10 al disponer el ingreso a rentas generales del producido de la venta de las tierras.

El Banco de la Nación Argentina establecerá el régimen de financiación para el estudio, fraccionamiento y distribución de los lotes, que no podrán ser mayores de 10 hectáreas cada uno ni se adjudicarán sino uno para cada familia siempre, repito, dándose preferencia a los actuales pobladores.

Los lotes dispondrán del riego que establecerá la reglamentación que a ese efecto ha de dictar el Poder Ejecutivo sin alterar las concesiones de riego existentes, que a la fecha de la promulgación de esta ley se encuentren en uso, para las tierras del Valle de Huaco.

El proyecto contempla también la apertura de créditos especiales por el Banco de la Nación, para que los colonos vean facilitadas sus posibilidades de tra-

bajo, con préstamos para la compra de semillas, plantas, cultivos, etcétera.

Además, y consecuente con los principios establecidos en leyes análogas, se dispone la inembargabilidad de los lotes, mejoras y cosechas, con mira a una mayor protección al trabajador rural.

La finalidad generosa y de bien común que el proyecto que informo tiende a alcanzar, me exime de mayores fundamentaciones sobre todo en estos momentos en que el excelentísimo señor presidente anuncia que todo el amparo estatal ha de volcarse en auxilio de los trabajadores del campo.

Nada más, señor presidente.

Rinaldo Viviani.

—A las comisiones de Obras Públicas y de Agricultura.

3

MOCION

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Hago moción para que el proyecto de comunicación del senador Amelotti sobre construcción de una línea férrea en Córdoba, que tuvo entrada en la sesión especial de esta mañana, se trate sobre tablas al final de la sesión, por no encontrarse en el recinto en estos momentos el autor del proyecto, y al mismo tiempo, solicito que entremos a considerar los siguientes asuntos: Orden del día 155, relativa a un despacho de la Comisión de Obras Públicas; orden del día 156, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; orden del día 128, referente a un despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; orden del día 157, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; orden del día 129, de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; orden del día 158, relativo a un despacho de las comisiones de Agricultura y de Industria y Comercio; orden del día 160, de la Comisión de Asuntos Constitucionales; orden del día 161, de la Comisión de Trabajo; orden del día 150, referente a un despacho de la Comisión de Obras Públicas y la 159, de la Comisión de Justicia. Además, la consideración sobre tablas, de un despacho de la Comisión de Previsión Social, relativo a la jubilación de magistrados judiciales; otro de la Comisión de Transportes sobre un proyecto de ley en revisión referente a la concesión de pases y por último, un proyecto de ley del senador Mendiondo por el que se acuerda pensión a doña Antonia Paca Tomasetti de Cochia.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Salta.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Así se procederá.

4

**LEY ORGANICA PARA LA ADMINISTRACION
GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA
NACION**

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Obras Públicas ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 27 de septiembre de 1949.

Arcadio B. Avendaño. — Alfredo J. L. Arrieta. — Samuel Gómez Henríquez. — Francisco R. Luco. — Lorenzo Soler (h.).

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación**

(Septiembre 23 de 1949)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Institución

Artículo 1º — La actual Administración General de Obras Sanitarias de la Nación constituirá una institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, conservando su actual denominación.

Objeto de la institución

Art. 2º — Corresponde a la misma el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República, y la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios, o bien a participar en empresas de capital mixto, que persigan el mismo objeto.

*Organización, atribuciones, deberes
y autoridades*

Art. 3º — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación funcionará con la autarquía que le atribuye la presente ley, pero el Poder Ejecutivo ejercerá sobre ella la superintendencia necesaria para el debido control de su funcionamiento y podrá intervenirla cuando las exigencias del buen servicio lo hicieran indispensable.

La superintendencia prevista en el párrafo precedente se ejercerá sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Contaduría General de la Nación por la ley de contabilidad y demás vigentes, salvo en cuanto hayan quedado modificadas por la presente.

Art. 4º — Para el cumplimiento de los fines consignados en el artículo 2º, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá las siguientes facultades:

- a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución en las condiciones establecidas por el Código Civil y con las responsabilidades que él determina, pudiendo representarla en juicio, sea como demandante o demandada, y transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales, y adoptar las medidas que estime necesarias para la debida prestación de los servicios a su cargo, con arreglo a las disposiciones de la presente ley, a las reglamentaciones en vigor o que en lo sucesivo apruebe el Poder Ejecutivo;
- b) Celebrar convenios de compraventa o locación de bienes muebles o inmuebles, aceptar donaciones, celebrar contratos para la adquisición de materiales, ejecución de obras y prestación de servicios con licitación pública o sin ella, de acuerdo con las leyes de contabilidad y de obras públicas;
- c) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la institución, así como el plan de trabajos públicos y los correspondientes reajustes de todos ellos, para su elevación al Poder Ejecutivo nacional;
- d) Proponer al Poder Ejecutivo la fijación de la tarifa para el cobro de los servicios que presta la institución;
- e) Promover ante las autoridades provinciales y municipales las tramitaciones tendientes al acogimiento de las ciudades y pueblos del interior del país al régimen de la presente ley.

Art. 5º — Será dirigida por un Consejo de Administración presidido por un administrador

general e integrado por los directores generales: técnico, de explotación comercial, de finanzas y contabilidad, de asuntos jurídicos y de personal y asistencia social, nombrados por el Poder Ejecutivo.

Los directores generales técnico y de explotación comercial reemplazarán en este orden al administrador general, en caso de vacancia o ausencia o imposibilidad temporaria del titular.

Art. 6º — Corresponde al Consejo de Administración la resolución de los siguientes asuntos:

- a) Aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos y de la memoria anual;
- b) Aprobación de proyectos y presupuestos de obras y determinación de la oportunidad y forma, por administración o por contrato, de ejecución de las mismas;
- c) Aprobación de pliegos de condiciones y especificaciones para licitar la construcción de obras y ejecución de trabajos o servicios, y para la compraventa de materiales, artefactos, maquinarias, etcétera, y su adjudicación, o la adjudicación o compra directa de los mismos y todo lo concerniente al cumplimiento de los contratos emergentes en los casos en que su importe exceda de veinte mil pesos moneda nacional (\$ 20.000);
- d) Organización y distribución de las dependencias de la repartición;
- e) Formulación de los reglamentos internos y de los que deban someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- f) Determinación de las tarifas para el cobro de los servicios prestados;
- g) Compraventa y locación de inmuebles, expropiaciones y servidumbres;
- h) Adquisición de obras e instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal;
- i) Confección del plan anual de trabajos públicos;
- j) Celebración de arreglos judiciales o extrajudiciales y transacciones;
- k) Aceptar donaciones;
- l) Consideración de todo otro asunto que someta a su consideración el presidente.

Las resoluciones del Consejo de Administración serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el administrador general doble voto en caso de empate. Si el administrador general estuviera en desacuerdo con lo resuelto por la mayoría del consejo, el asunto será llevado al Poder Ejecutivo, el que resolverá en definitiva.

Art. 7º — El administrador general tiene a su cargo la parte ejecutiva de la repartición, ejerce su representación legal y administrativa y le corresponde resolver los asuntos no reservados para el Consejo de Administración.

Art. 8º — El administrador general podrá delegar en las dependencias principales de la administración la adopción de resoluciones en cuanto se trate de la simple aplicación de normas establecidas en leyes o reglamentos y no comprometan el patrimonio de la repartición.

Aplicabilidad de la presente ley y régimen de convención

Art. 9º — Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, desde su promulgación, en la Capital Federal, territorios nacionales y poblaciones de provincias en las cuales Obras Sanitarias de la Nación presta ya los servicios a que se refiere el artículo 2º.

Art. 10. — La incorporación de nuevas ciudades y pueblos de provincias al régimen establecido en la presente ley se producirá mediante el siguiente procedimiento: las legislaturas sancionarán leyes que declaren con carácter general el acogimiento de la provincia y acuerden a las municipalidades respectivas la facultad de acogerse en cada caso particular; una vez producida la expresión de voluntad de la municipalidad o bien de la autoridad que haga sus veces, en caso de que no existiera organismo comunal con facultades suficientes, el Poder Ejecutivo provincial declarará por decreto el acogimiento, con lo que quedará perfeccionado el vínculo contractual sobre la base de las disposiciones de la presente ley y reglamentación complementaria.

Art. 11. — Transcurrido el término de tres años, a contar de la fecha del acto que declare su acogimiento a la presente ley, sin que se hubiere dado comienzo a la ejecución de las obras, la municipalidad respectiva podrá desistir del mismo, a cuyo efecto dictará la ordenanza correspondiente y la comunicará a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Si el proyecto de las obras estuviera ya perfeccionado, la municipalidad deberá reintegrar su costo a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en caso de que lo utilice para la construcción de las obras.

Art. 12. — Cumplida la tramitación prescrita en el artículo 10, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación efectuará los estudios y formulará el proyecto respectivo, el que será aprobado en la forma que establece el artículo 6º.

Art. 13. — Mientras las obras construídas no hayan sido entregadas a las autoridades provinciales o municipales en virtud de lo que establecen los artículos 48 y 50, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejecutará las obras de ampliación, renovación y mejoramiento que el buen servicio haga necesarias.

Art. 14. — Desde la fecha del acogimiento de las ciudades y pueblos al régimen de la presente

ley, no podrán otorgarse en los mismos concesiones para la prestación de los servicios de provisión de agua y desagüe cloacal que ella contempla, ni prestarse por instituciones provinciales o municipales; pero en las localidades donde ya exista una concesión particular, podrá convenirse la subsistencia de la misma contemporáneamente con la prestación que la Nación toma a su cargo, siempre que el radio de acción se delimite en forma de que no se produzcan superposiciones.

Régimen financiero

Art. 15. — Los ejercicios financieros, las rendiciones de cuentas y la inspección de la contabilidad de la institución, se sujetarán a las disposiciones de la ley de contabilidad con la intervención pertinente de la Contaduría General de la Nación. Dentro del primer semestre de cada año, el presidente presentará al Poder Ejecutivo la memoria correspondiente al ejercicio anterior.

Art. 16. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá siempre sus depósitos en el Banco Central de la República o en el establecimiento que éste determine, en cuenta corriente o a plazo fijo, y queda autorizada a adquirir títulos de la deuda pública de la Nación, con intervención del Ministerio de Hacienda, o el de Finanzas, siempre que la operación resulte conveniente para evitar pérdidas de intereses.

Art. 17. — No podrá apartarse de las autorizaciones de gastos contenidas en su presupuesto general aprobado, ni alterar los sueldos en forma alguna, directa o indirectamente, sin autorizaciones del Poder Ejecutivo en cada caso.

Art. 18. — Para los gastos que demanden los estudios, proyectos, construcción, renovación y ampliación de las obras, créase un crédito global de \$ 200.000.000 moneda nacional por año, que se considerará incluido en las leyes 12.576 y 12.815, para ser atendido con el producido de la emisión de títulos. No se operará el arrastre de dicho crédito, debiendo cancelarse los excedentes anuales que se produzcan.

El Poder Ejecutivo, por conducto de los departamentos de Obras Públicas y de Hacienda, fijará en un plan anual, que aprobará en particular para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, la suma a invertir en el ejercicio. Una vez aprobado, la Administración de Obras Sanitarias de la Nación, quedará facultada para contratar la construcción de las obras y adquisición de materiales y elementos destinados a las mismas con arreglo a las disposiciones de las leyes de contabilidad y de obras públicas. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá contratar la ejecución de obras y compra de materiales por sumas que excedan a las asignadas para el

ejercicio, cuando se trate de trabajos cuya realización requiera más de un año, sin que excedan los créditos correspondientes a esos años futuros, pero sólo podrá invertir anualmente la cantidad fijada en el plan de trabajos.

Las sumas que con tales objetos se entreguen a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación se acreditarán en una cuenta especial. El servicio financiero de estas sumas se efectuará en la forma que más adelante se dispone.

Art. 19. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación atenderá los gastos de explotación y servicios financieros de las obras construídas en la Capital Federal y en las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales con los siguientes recursos:

- a) Los provenientes de las transferencias que efectúe la Dirección Inmobiliaria Nacional con arreglo a la ley número 12.922 o las que los complementaren o substituyesen;
- b) La recaudación por otros conceptos en la Capital Federal, y por todos los servicios prestados en localidades del interior de acuerdo con las tarifas que fijará el Poder Ejecutivo nacional, inclusive los derechos de oficina que establezcan las reglamentaciones pertinentes;
- c) El importe de las multas y recargos que sean de aplicación de acuerdo con la presente ley y con los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo nacional;
- d) El aporte de rentas generales que fije anualmente el presupuesto general de la Nación, como compensación por tarifas de fomento o servicios gratuitos en las localidades a que se refiere el artículo 51;
- e) Las donaciones y legados.

Si la suma de esos recursos no alcanzara a cubrir los egresos del ejercicio por concepto de gastos de explotación, el déficit que se produzca será atendido de rentas generales, con carácter de contribución no reintegrable. También se hará remisión a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación de los servicios financieros que haya dejado de cumplir en el año por falta de fondos.

En el presupuesto general de gastos de la Nación, se incluirán las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones prece-dentes.

Art. 20. — La suma entregada a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras de salubridad, fijada en la cantidad de \$ 448.058.215,89 al 31 de diciembre de 1939, por decreto 75.517, de fecha 26 de octubre de 1940, y las que con el mismo fin ha recibido con posterioridad y reciba en el futuro, devengarán un interés igual al

menor nominal de los títulos de la deuda pública nacional y su importe será reintegrado por aquella institución mediante la entrega de una cuota del 2 % anual, no acumulativa. Los intereses de esas sumas comenzarán a correr el 1º de enero del año siguiente al de su entrega.

Por los capitales entregados con destino a estudios y construcción de obras, el reintegro comenzará a computarse una vez puestas en explotación las mismas obras; hasta ese momento, los referidos capitales sólo devengarán intereses.

Declárase cancelada la deuda de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con el gobierno nacional por servicios de amortización e intereses no pagados y las sumas recibidas para costear los déficit de explotación. La presente cancelación de deuda se aplicará con relación a la cuenta global que se crea por el artículo 18, pero no tendrá efecto respecto de las cuentas singulares a que se refiere el artículo 48.

Art. 21. — Si en el ejercicio de un año la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación alcanza a cubrir los gastos industriales, los intereses correspondientes y la cuenta de reintegro, el excedente será destinado en el año siguiente a la construcción de nuevas obras o a la renovación, ampliación y mejoramiento de las existentes, a cuyo efecto se incluirán las partidas respectivas en el plan correspondiente.

Régimen de explotación

Art. 22. — Si el 1º de enero de cada año no se hallare sancionado el presupuesto general de gastos y recursos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o el Poder Ejecutivo no hubiera acordado la autorización prevista en el artículo 16 de la ley 12.961, se considerará prorrogado el vigente para el año anterior.

Art. 23. — Producida la aprobación expresa de su presupuesto o la prórroga automática prevista en el artículo precedente, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para realizar la adquisición de los materiales y elementos y celebrar las contrataciones que requiera la explotación de los servicios con arreglo a las leyes de contabilidad y de obras públicas.

Art. 24. — En todos los distritos con obras en construcción o explotación, regirán los reglamentos y disposiciones que hayan dictado para los servicios sanitarios de la ciudad de Buenos Aires el Poder Ejecutivo o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, como así también las disposiciones legales o reglamentarias referentes a los establecimientos industriales. Las modificaciones que en el futuro introduzcan a las mismas el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional o la Administración General de Obras Sanitarias de la

Nación, cada una en la esfera de su competencia, tendrán carácter de obligatorias en todos los distritos en cuanto sean de aplicación en ellos.

Art. 25. — A requerimiento de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las empresas de servicios públicos, instituciones o particulares que hagan uso u ocupen el suelo o subsuelo, removerán sus instalaciones cuando sea necesario para la construcción o explotación de las obras previstas en la presente ley. Los gastos que esos trabajos demanden serán abonados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, salvo que los concesionarios se hallen obligados a soportarlos, porque así lo establezcan sus respectivos contratos de concesión. La remoción de las instalaciones de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación será costeadada por quienes la soliciten.

Art. 26. — La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal, será obligatoria para todo inmueble habitante comprendido dentro del área donde se hayan instalado las cañerías de distribución de agua y las colectoras de cloacas. También deberá dotarse de esos servicios a los inmuebles que sin ser habitables por personas se utilicen para estabular.

Art. 27. — Las obras domiciliarias externas serán construídas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, y las obras internas por los propietarios. Las conexiones serán costeadas por la citada repartición, salvo las excepciones que establezca la reglamentación.

Art. 28. — Los propietarios o poseedores estarán obligados a instalar los servicios de agua y desagüe cloacal y a mantener en buen estado las instalaciones.

Los trabajos se ejecutarán con intervención y aprobación de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Los empleados autorizados para vigilar y dirigir los trabajos domiciliarios o inspeccionar las instalaciones tendrán acceso a los inmuebles, con las limitaciones que fije la reglamentación. Cuando se opusiere resistencia, el administrador general o el jefe del distrito local pedirá el auxilio de la fuerza pública, el que será acordado por las autoridades policiales.

Art. 29. — Desde la fecha en que se inicie la construcción de las obras queda prohibida la perforación de pozos a cualquier profundidad, sin permiso previo de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, dentro del radio servido, o a una distancia inferior a 500 metros de cualquier fuente de provisión de agua.

Los pozos existentes dentro del radio servido cuyas aguas se utilicen para la bebida, deberán ser cegados bajo la inspección de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, una vez habilitada la provisión de agua.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá autorizar la conservación de aquellos pozos cuya agua se utilice para riego o para industrias ajenas a la alimentación de las personas, cuando no constituyan un peligro para las demás napas subterráneas. Los pozos existentes dentro del radio de 500 metros de las fuentes de provisión de agua, deberán ser cegados si existiera peligro de contaminación de éstas.

Art. 30. — En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 28 y 29, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá proceder de oficio a la obturación de los pozos y a construir o reparar las obras internas, así como a reconstruirlas si hubieran sido mal ejecutadas por cuenta de los propietarios o poseedores y con el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado en la forma prevista en el artículo 25.

Art. 31. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación está autorizada a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua, en caso de que pudieran afectar la salubridad de las ciudades o pueblos en que preste sus servicios, y para impedir la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de agua que utilice, y queda facultada para disponer la clausura de los establecimientos industriales cuyos dueños no dieren cumplimiento a las disposiciones que ordene.

Art. 32. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejercerá la vigilancia del vertimiento de líquidos residuales transportados por vehículos en las localidades donde presta servicios, con sujeción a los reglamentos que dicte.

Art. 33. — Tanto la provisión de agua a la población como el desagüe de las aguas servidas están previstos para los usos ordinarios dentro de los inmuebles, no comprendiéndose en tal carácter el uso del agua para riego, o para las industrias que no elaboran artículos alimenticios, ni el desagüe de establecimientos industriales.

Art. 34. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación queda facultada para imponer penas pecuniarias que no excedan de \$ 1.000 a los propietarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley o en el reglamento para la construcción y funcionamiento de las obras domiciliarias. Estas multas podrán ser hasta de \$ 10.000, en caso de establecimientos industriales.

Los importes recaudados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en concepto de multas, se incorporarán a su renta, como compensación de los gastos que originen las funciones de inspección y contralor que la presente ley pone a su cargo.

Art. 35. — Todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicio, aun cuando carezca

de instalaciones domiciliarias, estará obligado a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las tarifas. Este pago será obligatorio también para los inmuebles que estén desocupados.

Las tarifas serán iguales para todos los distritos y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 36. — Todos los inmuebles edificados de propiedad de la Nación, de las provincias o de los municipios, cualquiera sea la índole de su ocupación, abonarán los servicios de acuerdo con las tarifas. Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.

Las municipalidades deberán abonar el agua corriente que utilicen para riego y limpieza de calles, plazas y paseos públicos, con arreglo a la tarifa uniforme que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 37. — Los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, estarán eximidos del pago de las cuotas de desagüe pluvial. También estarán exentos del pago de los servicios de agua y de desagües cloacales, cuando carezcan de las conexiones respectivas.

Art. 38. — Los importes de las boletas por servicios sanitarios y demás cuentas que emita la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo pago no se efectúe en la época establecida al efecto, serán gravados con un recargo del 3 % por cada mes de atraso, hasta un máximo del 15 %, luego de lo cual serán pasadas a cobro por vía de apremio con dicho recargo del 15 % sobre su importe. Los valores correspondientes al servicio de agua para construcción, en lugar del recargo progresivo anterior, sufrirán un recargo fijo del 25 % sobre su importe.

Las sumas recaudadas en concepto de recargo tendrán el carácter de compensatorias de los mayores gastos originados por la falta de percepción en oportunidad del importe de los servicios.

Los recargos establecidos en el presente artículo, no se aplicarán a las cuentas correspondientes a inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades.

Art. 39. — Los inmuebles en los cuales la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hubiere construido obras, conforme se establece en el artículo 46, por cuenta de los propietarios, y los que adeuden servicios, multas y cualquier otra suma de acuerdo con las disposiciones de esta ley, quedarán afectados al pago de la deuda hasta su cancelación. El crédito correspondiente a las obras mencionadas, tendrá el privilegio establecido en el artículo 3931 del Código Civil; el correspondiente al servicio y sus recargos tendrá el establecido en los

artículos 3879, inciso 2º, y 3880, inciso 5º, del mismo código. Ambos privarán sobre el crédito hipotecario posterior a las construcciones o a la prestación de los servicios, respectivamente.

Art. 40. — Antes de escriturarse una transferencia de dominio o constitución de derechos reales, o de ordenarse la inscripción de una sentencia o auto judicial que declare o reconozca una transmisión de derechos sobre inmuebles, se requerirá de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación un certificado en el que conste la deuda que por cualquier concepto reconozca el inmueble de que se trate. Dicho certificado tendrá una validez de quince días contados desde la fecha de su expedición.

Los escribanos públicos deberán incorporar dicho certificado al protocolo en caso de escritura, así como la posterior constancia de pago, si éste resultare obligatorio según lo que se establece a continuación.

Art. 41. — El pago de los servicios, recargos y multas, como así también el de las cuotas vencidas en el caso de construcción de obras domiciliarias, se hará indefectiblemente y en su totalidad en toda clase de escrituras dentro de los diez días subsiguientes a su otorgamiento.

Para las cuotas no vencidas de la deuda por construcciones realizadas de acuerdo con el artículo 46, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá previa solicitud de los interesados, autorizar que las facilidades de pago concedidas se mantengan, sea en favor del adquirente en caso de transferencia de dominio, sea del mismo propietario en caso de constitución de derechos reales.

Art. 42. — El Registro de la Propiedad de la Capital Federal y Territorios Nacionales, y los de las provincias, no inscribirán títulos de dominio o de constitución de derechos reales, sin la constancia, en los testimonios de las respectivas escrituras, de haberse abonado la deuda certificada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o de haberse aceptado la substitución del deudor o el mantenimiento de las facilidades si se trata de deuda no vencida correspondiente a obras construídas conforme al artículo 46. El mismo requisito se exigirá en los oficios que ordenen la inscripción de declaratorias de herederos, testamentos, autos o sentencias que reconozcan, declaren o transfieran tales derechos.

Art. 43. — En las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales será juez competente para entender en las demandas que se inicien por cobros de las sumas que se adeuden de conformidad con la presente ley, el juez federal de sesión o el juez letrado de territorio que corresponda.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación o el apoderado que ésta designe, intervendrá en dichos juicios como representante del fisco.

Art. 44. — El cobro de las cuentas se hará por vía de apremio que establece la ley nacional de procedimientos, sirviendo de suficiente título el certificado que expida la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, designando a los inmuebles deudores, y expresando la deuda que resulte de sus libros.

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad extrínseca del título, falta de personería y defensa de falta de acción, debiendo probarse la primera con los correspondientes recibos de pago.

No procederá en él la obligación de afianzar las resultas de juicios ordinarios.

Art. 45. — Las instalaciones o inmuebles de propiedad o en posesión de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, estarán exentos de todo impuesto, tasa, contribución de servicios y de mejoras, y de cualquier otro gravamen que hayan sancionado o sancionen la Nación, las provincias, sus municipalidades y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Régimen de construcción de obras domiciliarias con beneficio de su pago por cuotas mensuales

Art. 46. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá construir obras domiciliarias de provisión de agua y desagüe cloacal a pedido y por cuenta de los propietarios, quienes las abonarán en 60 cuotas mensuales e iguales, incluyendo intereses del 5 % anual capitalizado semestralmente.

Art. 47. — Por los fondos suministrados o que se surtinen en adelante a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras domiciliarias y plazos, no se computará la cuota de reintegro. Dichos fondos serán devueltos a la tesorería nacional a medida que resulten innecesarios. En concepto de intereses, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación liquidará al gobierno nacional las mismas sumas que perciba de los propietarios deudores.

Régimen de rescate de las obras

Art. 48. — Una vez reintegrado el costo de las obras construídas en localidades del interior, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hará entrega de las mismas a las autoridades locales respectivas, a su requerimiento. En caso de no mediar tal requerimiento, la explotación de los servicios seguirá a cargo de la citada repartición nacional, en las condiciones establecidas en la presente ley.

A los fines del presente artículo, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación llevará cuenta separada por cada ciudad o pueblo en que administre obras de salubridad, acreditará en ella los productos de la explotación y las amortizaciones extraordinarias que

efectúen las autoridades locales y debitará los gastos industriales, intereses y cuotas de reintegro. Se entenderá reintegrado el costo de las obras construídas cuando los superávit anuales de esa cuenta alcancen a cubrir la totalidad de los capitales invertidos y las sumas empleadas para atender déficit de explotación que se hubieran producido.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación enviará a pedido de parte, a cada provincia y municipalidad interesada, el balance correspondiente al estado de la cuenta expresada.

Art. 49. — No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no serán rescatables los servicios correspondientes a localidades que tengan obras comunes con las de la Capital Federal, o que comprendan en una sola unidad técnica distritos ubicados en un territorio federal y una provincia, o en dos provincias, o en un punto cualquiera del territorio nacional y en un Estado extranjero.

Art. 50. — Los distritos o explotaciones que, correspondiendo a distintas ciudades o pueblos, constituyan por sus características un solo sistema, y no estén comprendidos en ninguno de los casos previstos en el artículo anterior, únicamente podrán ser rescatados una vez reintegrado el costo del conjunto de las obras que formen ese sistema.

Régimen de construcción de obras de carácter reducido

Art. 51. — En las localidades en las cuales por su escasa población o por falta de capacidad contributiva o por otras razones económicas, resulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario, de provisión de agua potable, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación establecerá un servicio provisional, a base de surtidores públicos, ubicados en el número y forma suficientes, para la provisión gratuita de agua a los habitantes de la localidad y podrá destinar el excedente de líquido que se produzca para el servicio de abrevaderos públicos de hacienda.

En casos muy especiales, de verdadera excepción, fundados en razones de orden sanitario o económico y cuando el caudal de agua lo permita, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá conceder conexiones para el servicio domiciliario de determinados establecimientos, cobrando por el mismo la retribución que fije la tarifa que establezca al efecto el Poder Ejecutivo.

Art. 52. — Si realizadas perforaciones el agua que se obtenga no resultare apta para el consumo humano, pero sí para otros usos domésticos o para abrevar hacienda, las instalaciones serán entregadas a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica o a las autoridades locales para su ulterior atención.

Cláusulas especiales

Art. 53. — Para determinar el orden de ejecución de los estudios y obras en las localidades del interior del país, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá en cuenta el número de habitantes y sus condiciones de salubridad, a cuyo efecto podrá solicitar el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública.

Art. 54. — Cuando por razones de salubridad fuere necesario el abastecimiento de agua especialmente potable a núcleos de población situados dentro de las zonas de regadío servidas por obras de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, la ejecución de las respectivas instalaciones y su explotación corresponderá a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 55. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá convenir con otras reparticiones del Estado, de las provincias o de las municipalidades, ad referendum del Poder Ejecutivo nacional, la instalación de obras y prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de desagüe cloacal en determinadas zonas o poblaciones, para satisfacer principalmente necesidades derivadas de explotaciones industriales, ferroviarias, etcétera, quedando a cargo de las reparticiones beneficiadas la financiación de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las obras, total o parcialmente, conforme sea la extensión y carácter de los servicios.

Art. 56. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará exenta de todo derecho de aduana, básico o adicional, por la importación de útiles, maquinarias, medios de transporte y cualquier otro material que se destine a la construcción por administración o por contrato o a la explotación de sus obras y servicios.

Art. 57. — Las multas incurridas por falta de cumplimiento, total o parcial, de los contratos celebrados con la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, así como los depósitos dados en garantía cuya pérdida se produzca por las mismas causas, se incorporarán a su renta.

Art. 58. — Declárase de utilidad pública el suelo o el subsuelo de los terrenos de propiedad privada y las fuentes de provisión de agua, que sean necesarias para la ejecución de las obras que se construyan o amplíen en virtud de esta ley, en todo el territorio de la Nación y queda autorizada la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para proceder a su expropiación, de acuerdo con la ley de la materia.

Art. 59. — En el caso de acogimiento, de acuerdo al artículo 10, las provincias y municipalidades entregarán a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, libre de todo cargo o gravamen, los terrenos y fuen-

tes de provisión de agua que les pertenezcan y sean necesarios y constituirán las servidumbres que se requieran para la construcción, ampliación y explotación de las obras.

Art. 60. — Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a título gratuito, los terrenos fiscales que sean necesarios para la ejecución de las obras previstas en esta ley, y concédese igual autorización para transferir con el mismo destino los terrenos municipales de la Capital Federal.

Art. 61. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a solicitud de las autoridades locales y con autorización del Poder Ejecutivo, podrá tomar a su cargo, a medida que cuente con los recursos necesarios, las obras o instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal de propiedad provincial o municipal o de empresas privadas que actúen en virtud de concesiones, que sirvan a las ciudades y pueblos que se acojan al régimen de la presente ley.

En caso de que las obras o instalaciones fueran de propiedad provincial o municipal, deberán ser entregadas por sus autoridades sin carga y su importe se acreditará en la cuenta patrimonial del distrito a formarse para la explotación de las mismas; sin embargo, ambas partes podrán convenir que Obras Sanitarias de la Nación se haga cargo de la deuda que hubiere contraído la autoridad local para construir las instalaciones que se transfieren, siempre que se trate de deuda no amortizada y que su monto no sea superior al valor físico de utilización de tales instalaciones que se determinará en la forma establecida en el apartado siguiente.

Si las obras o instalaciones fueran de pertenencia de empresas privadas, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, abonará por las mismas su valor físico de utilización, siempre que el sea inferior al costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. En caso de que el costo de origen determinado en esa forma, sea inferior al del valor físico de utilización, sólo se abonará el importe de aquella determinación.

Entiéndese por valor físico de utilización, el valor físico de origen de las instalaciones y maquinarias disminuido por la depreciación de uso, no contándose aquellas instalaciones y maquinarias que no sean utilizables para los nuevos servicios a prestar por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. La determinación de esos valores será efectuada por la citada repartición y sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

Las provincias y municipalidades deberán tomar a su exclusivo cargo el pago de toda suma que deba invertirse para la compra, rescate o expropiación de esas obras e instalaciones de propiedad privada, en cuanto exceda al valor físico de utilización.

Art. 62. — Serán conservadas en poder de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación las usinas construídas y en explotación por la misma para el exclusivo suministro de energía eléctrica a sus propias instalaciones; y podrá construir nuevas usinas, con iguales fines, cuando no existan en las localidades donde se disponga la realización de obras de saneamiento.

En aquellos casos en que exista la posibilidad de una utilización de la energía que emana de sus instalaciones específicas, las instalaciones energéticas podrán ser proyectadas y realizadas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. El sobrante de la energía generada, después de satisfechas las necesidades propias, podrá ser enajenado, debiendo hacerlo con preferencia o exclusividad, según los casos, a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.

Art. 63. — En los territorios nacionales, toda fundación de nuevos centros de población quedará supeditada al dictamen favorable de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, sobre la posibilidad de un adecuado aprovisionamiento de agua potable.

Art. 64. — Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a la presente ley, y, en particular, al artículo 172 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto, edición 1943.

Disposición de emergencia

Art. 65. — Decláranse hechos con facultades suficientes, en cuanto no hayan excedido las que la ley 8.889 otorgaba al extinguido directorio, los actos realizados por Obras Sanitarias de la Nación, o por la Administración Nacional del Agua, con respecto a los servicios y obras que competen específicamente a dicha repartición y que hayan sido dispuestos por autoridades y funcionarios que en virtud de decretos del Poder Ejecutivo nacional substituyeron al directorio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido esas autoridades y funcionarios por inobservancia de otras leyes o reglamentos.

Art. 66. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. — En consideración.

Sr. Avendaño. — Pido la palabra.

Al informar el despacho de la Comisión de Obras Públicas sobre ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la

Nación, hubiera deseado hacerlo con la extensión que por la importancia del asunto correspondería, pero la premura del tiempo me obliga a limitarme, puesto que el Honorable Senado tiene que considerar aún varios asuntos.

En el proyecto de ley en consideración, se han contemplado las autonomías provinciales, respetándolas, como también el régimen municipal, punto muy importante para el Honorable Senado, integrado por representantes de las provincias argentinas confederadas, como bien lo hiciera notar su excelencia el señor vicepresidente de la República, en su discurso pronunciado en la sesión especial de este honorable cuerpo del 24 del corriente, al agradecer a su excelencia el señor presidente de la República, en nombre del Honorable Senado, la donación del mástil y la bandera que tenemos en el recinto.

En efecto, señor presidente, todo el sistema para la prestación de los servicios en territorios de las provincias se basa en un convenio previo entre los gobiernos de la Nación y provincia (artículo 10), respetándose así el régimen federal consagrado por la Constitución, esencia misma de este honorable cuerpo. Y a tal punto llega el respeto al régimen federal, que en su articulado no se atribuye a la Nación el dominio perpetuo de los servicios, sino que éstos, una vez amortizados, se entregan a las municipalidades o gobiernos de provincias, sin cargo alguno (artículo 48).

Otra característica fundamental del proyecto, señor presidente, consecuencia del anterior, es su régimen financiero, basado en los anticipos que para realizar las obras hace la Nación con fondos provenientes de la negociación de títulos que devengan intereses; fondos éstos que, así como los intereses que la Nación paga, deben ser amortizados para que los servicios puedan ser entregados a la autoridad local. Esto no significa en ningún momento que la Nación se pague intereses a sí misma, como se ha dado en afirmar; no, señor presidente, sino que en virtud de un régimen creado para defender los intereses locales, deben contabilizarse los gastos por todo concepto para amortizarlos luego con los ingresos que los mismos servicios producen.

Con esa misma finalidad, y teniendo en cuenta que la repartición recauda dos veces al año —por semestre—, y además que debe formar fondos de reserva, que no son ahorros, sino que responden a finalidades de conocimiento elemental en materia financiera, como riesgos contra siniestros, renovación de maquinarias, etcétera, es que se establece la facultad de adquirir títulos de la deuda pública y de efectuar sus depósitos en cuenta corriente o a plazo fijo, según resulte más conveniente.

La organización administrativa proyectada es la que la experiencia ha demostrado más ade-

cuada, señor presidente, para esta repartición técnica.

Concediéndole las facultades necesarias para que pueda desenvolverse eficientemente, se mantienen las limitaciones derivadas de la ley de contabilidad 12.971, y no podrá ser de otra forma. El jefe superior de la repartición es un administrador general (artículo 59) y un consejo de administración formado por funcionarios técnicos, que viene a substituir el directorio de la ley anterior 8.889.

Su dependencia del Ministerio de Obras Públicas está regida por la ley de organización de los ministerios, y la característica que, a falta de un vocablo más apropiado, se ha dado en llamar «la autarquía que le concede la ley», está constituida por una creación de ente jurídico, con determinada libertad de acción y con limitaciones que emanan de la estructuración financiero-económica del gobierno de la Nación, coordinadora del conjunto de intereses y necesidades aisladas.

La personalidad jurídica de la entidad esta perfectamente determinada en el artículo 49 de proyecto. Puede contratar, estar en juicio, administrar los bienes encomendados a su gestión, etcétera. Posee atributos que le permitirán actuar como organismo jurídico capaz de desenvolverse en forma amplia, que le permitirá llenar cumplidamente los fines para los que ha sido creada.

En materia de trabajos públicos, la ley no innova, y no podría ser de otra manera, señor presidente, porque de lo contrario alteraría el régimen uniforme para las obras del Estado.

Pero en lo que se introduce una novedad interesante, señor presidente, es en lo referente a las autorizaciones o créditos legales, ya que por el artículo 18 se crea un crédito global anual de 200.000.000 de pesos, que permitirá al Poder Ejecutivo incluir siempre en los planes anuales aquellas obras que considere urgentes, pues con este arbitrio todas contarán con crédito legal dentro del margen fijado, pero sin operarse arrastre de dicho crédito, cancelándose anualmente los sobrantes.

Las funciones de saneamiento a cargo de las Obras Sanitarias de la Nación quedan también perfectamente delimitadas y aclaradas, señor presidente, en lo que se refiere a los cursos de agua. En este último aspecto es sabido que existían dos leyes: la 2.797, que no contenía sanción para los infractores, y resultaba, por lo tanto, inoperante, y la 4.198, que sólo se refería al territorio de la Capital Federal. En cambio, en el proyecto que se considera, la aplicación combinada de los artículos 31 y 34 permitirá a la repartición ejercer una eficaz acción de vigilancia para impedir la contaminación de los ríos de la República, sobre todo cuando ellos sirven como fuentes de provisión de agua.

El proyecto contiene, asimismo, modificaciones aconsejadas por una experiencia de medio siglo, y a veces (artículo 28) mantiene disposiciones de antiguas leyes, como la 1.917, que en su artículo 14 facultaba a la autoridad de la repartición para pedir el auxilio de la fuerza pública cuando se resistía el cumplimiento de disposiciones dictadas en defensa de la colectividad.

Como accesorio de los servicios a cargo de la repartición, se considera en el artículo 62 del proyecto el caso de las instalaciones energéticas destinadas exclusivamente a accionar las maquinarias que prestan aquel servicio en los lugares en que no exista una usina que pueda efectuar el suministro de energía. El referido artículo contempla dos casos:

1. — Instalaciones destinadas exclusivamente a Obras Sanitarias de la Nación, en que la totalidad de la energía producida es consumida por dicha repartición. Estas instalaciones, sean las existentes o las que se construyan con iguales fines, quedarán en poder de Obras Sanitarias de la Nación, porque constituyen un accesorio de los servicios sanitarios y no son aprovechables para el uso público.

2. — Instalaciones de producción de energía eléctrica en que se utilice la proveniente de los servicios de saneamiento, como ser el gas producido por la fermentación de los líquidos cloacales. En tales casos, la instalación energética queda a cargo de Obras Sanitarias de la Nación, porque ella forma una unidad con la de saneamiento, que es su causa, utilizando Obras Sanitarias únicamente la energía que necesita para su propio uso, y el resto la entrega a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.

Ambas soluciones tienen como principal fin la higiene pública, a cargo de Obras Sanitarias de la Nación, que no puede admitir la más remota posibilidad de que se afecte su continuidad.

Poner en manos de otro organismo instalaciones energéticas vinculadas íntimamente con los organismos básicos del saneamiento, implica tanto, señor presidente, como abandonar éstos al cuidado de entidades no especializadas y que no tienen la responsabilidad de la prestación eficiente y segura del servicio de higiene pública.

Tal eventualidad, señor presidente, es inadmisibles en su enunciado mismo, y esto se evita con el texto ya sancionado por la Honorable Cámara de Diputados, que estamos considerando.

Los excedentes de energía, Obras Sanitarias de la Nación los entregará al organismo que tiene a su cargo la comercialización de la energía producida por el Estado, de manera que Obras Sanitarias no se arroga ninguna función en la prestación del servicio público mencionado, y no interfiere en ningún momento con las atri-

buciones de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.

Finalmente, conviene hacer notar, señor presidente, que el proyecto amplía las funciones de la repartición en lo que se refiere a los servicios gratuitos que ya presta en las zonas áridas del país, pues la faculta para otorgar conexiones domiciliarias en casos especiales, con lo que se resolverán numerosas situaciones que en la actualidad carecen de solución legal.

En resumen, señor presidente, se trata de una ley que, respetando nuestro sistema federal y la organización administrativa general del país, proporcionará el instrumento necesario para que el organismo técnico que tiene a su cargo estos servicios pueda desenvolver sus actividades con mayor eficacia.

Por estas razones, señor presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas solicito la aprobación del despacho.

Sr. Cruz. — Pido la palabra.

Como consecuencia de la disolución del organismo designado con la sigla ANDA, recuperará su individualidad la antigua repartición Obras Sanitarias de la Nación, a la que el Poder Ejecutivo proyecta dotar de un estatuto legal, que es el que está considerando este honorable cuerpo, para adaptar la acción de dicho organismo a nuevas modalidades y a un nuevo sentido de la actividad administrativa de acuerdo con los principios del movimiento revolucionario peronista, ya que, como dijera el general Perón: «Ningún régimen, examinado en los detalles de su organización, es inmutable; si bien es posible descubrir leyes y principios universales, su aplicación es susceptible de modalidades diversas según el lugar y el momento en que se vive.»

Al estructurar esa repartición sobre nuevas bases, se tiende a conservar y consolidar su poderosa armazón, aplicando el viejo adagio de que «renovarse es vivir».

Es indudable que Obras Sanitarias de la Nación ha cumplido una labor útil en el pasado, y por ello, goza de un merecido prestigio adquirido en épocas en que la fuente de la riqueza nacional y los servicios públicos vitales para la colectividad estaban al servicio del capital foráneo.

El ejemplo de esta repartición constituía en esa triste época el más rotundo mentís a los que sostenían la incapacidad del Estado como administrador de la cosa pública. Tiene, pues, antes que ninguna otra repartición, el carácter de venerable precursora de la magnífica realidad que está viviendo el país.

Por otra parte, «la experiencia ha demostrado —afirma el general Perón— la imposibilidad de que economías jóvenes y vigorosas como la nuestra aguarden pacientemente a que la iniciativa privada alcance la debida madurez, o que sin adoptar adecuados resguardos, se le

confíen actividades y riqueza vinculadas a soberanos intereses».

Los problemas que debe estudiar y resolver Obras Sanitarias de la Nación son de una importancia fundamental, y ello explica la preocupación del Poder Ejecutivo para actuar con el instrumento que le permita ofrendarlos con eficacia.

La higiene urbana, tarea específica de la citada repartición, es condición básica para el desarrollo de los aglomerados de población, que llamamos ciudades o pueblos.

En primer lugar, el agua es fuente de vida. Sin ella la existencia humana no es posible y sus condiciones de potabilidad influyen en grado preponderante en la formación física de la población.

Algo análogo ocurre con la higiene domiciliaria. Por ello, se ha podido afirmar en la Cámara de Diputados, en sesión del 17 de diciembre de 1902, al discutirse la ley 4198, que «todo lo que se gaste en saneamiento nunca será bastante, porque gastos de esta clase tienen un carácter sagrado comparable a los que se hacen en defensa de la patria». Concepto éste que mantiene su actualidad y que comparte el partido de la revolución.

El proyecto de ley que tiene a consideración el Honorable Senado comienza por establecer la organización administrativa de la repartición como entidad descentralizada del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Las distintas atribuciones que le acuerda le permitirán desenvolverse con actividad dentro de las normas reguladoras de la actividad administrativa general y han sido concebidas teniendo en cuenta las características de este servicio público, que exige soluciones inmediatas, porque en esta materia la finalidad que se persigue no admite dilaciones fundadas en trabas burocráticas.

Luego se establecen normas sobre la aplicabilidad de la ley. Se fundan ellas en el artículo 68, inciso 13 de la Constitución Nacional, que atribuye al Honorable Congreso una legislación exclusiva sobre los servicios públicos explotados por el Estado nacional, y para la construcción de obras nuevas establece un acuerdo previo entre la Nación y las provincias, respetuoso de nuestro sistema federal.

En cuanto al régimen financiero, está basado, como es lógico, en las disposiciones orgánicas sobre finanzas nacionales dadas por las leyes de la materia, pero contempla la particularidad de estos servicios cuya prestación es, como dije anteriormente, siempre imperiosa.

El régimen de explotación se funda en el mismo concepto y en la obligatoriedad por parte de la población de respetar las disposiciones de la autoridad nacional en materia de salubridad domiciliaria, no sólo porque ellas se dictan en beneficio de cada uno de los habitantes, sino tam-

bién porque tienen en vista la defensa de la colectividad.

Diversas disposiciones afirman el carácter social de la ley, como el otorgamiento de facilidades a los propietarios de escasos recursos o la prestación de servicios gratuitos a los pueblos pobres.

En cuanto a las obras realizadas en el territorio de las provincias, ellas serán entregadas a éstas una vez amortizadas, principio que constituye una nueva afirmación del respeto de las autonomías provinciales.

Es interesante hacer notar que este régimen de construcción y explotación de obras municipales por la Nación, respetando al mismo tiempo los principios federales, constituye una feliz solución jurídica, única en el mundo, de acción concurrente tendiente a la satisfacción de una necesidad vital de interés general.

Ella permite la constitución de un sólido organismo altamente especializado, que puede encarar y realizar planes de conjunto, impuestos por el progreso técnico, que resultarían casi imposibles si la gestión de saneamiento fuera realizada independientemente por cada una de las poblaciones interesadas.

Estimo que el proyecto en consideración, perfecto como toda obra humana, satisface una sentida necesidad y permitirá al Poder Ejecutivo desenvolver su acción con la eficiencia indiscutible que ha demostrado en toda su acción de gobierno.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Esta ley que estamos tratando, señor presidente, tiene una importancia enorme, ya que se refiere a la provisión de agua a muchas poblaciones de nuestro país. En ella está perfectamente determinada la función de Obras Sanitarias de la Nación, a través del Ministerio de Obras Públicas. Pero voy a hacer solamente una pequeña aclaración, como antecedente, en cuanto a la relación que pueda tener la misma con el Ministerio de Salud Pública.

Sabida es la trascendencia enorme que tiene para la faz sanitaria de una población el suministro de agua, pero hay que tener presente también que la clase de agua que se suministra esté en condiciones químicas y bacteriológicas puras, sobre todo buscando las fuentes que la puedan proveer en esas condiciones. Cuando se dice provisión de agua, se debe hablar también de la evacuación de las aguas usadas mediante el sistema de pozos ciegos que hay en muchas ciudades y poblaciones del interior, vinculándolo con el procedimiento de las redes cloacales que se está generalizando, afortunadamente, en nuestro país.

La ley de coordinación de ministerios, que hemos votado a principios de este período, establece a qué ministerio corresponde una rama u otra, pero es muy difícil definir categóricamente, matemáticamente, lo que pertenece a un ministerio de-

terminado, porque la unidad es una y muy difícil de dividir. Y es claro que en más de una ocasión se encontrarán los ministerios y la legislatura con que debe haber coordinación entre ellos para poder llevar a buen término la acción de gobierno que se desea. En este caso, tiene mucha importancia la intervención del Ministerio de Salud Pública en las obras de instalación de agua corriente en una población, como también en la eliminación de las aguas servidas de la misma. Espero, en este caso como en cualquier otro, que habrá de existir la relativa coordinación y consulta entre los distintos ministerios, para que la obra pueda ser única, eficaz e integral.

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Disiento en absoluto con la interpretación que ha dado mi distinguido colega por Mendoza, por cuanto está bien definido en la ley de ministerios a cuál pertenece Obras Sanitarias de la Nación. Respecto a esa coordinación a que se refiere de los servicios cloacales y pozos ciegos, Obras Sanitarias trabaja directamente en concomitancia con los distintos municipios y autoridades de provincia, y nada tiene que ver en ese control el Ministerio de Salud Pública.

Quiero dejar expresa constancia de que esto está bien determinado en la ley de ministerios y que Obras Sanitarias pertenece al Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente. — Queda convertido en ley.

5

PERMUTA DE TERRENOS CON LA PROVINCIA DE JUJUY

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, autorizándolo a permutar con el gobierno de la provincia de Jujuy un inmueble de propiedad fiscal ubicado en la misma ciudad por otro de propiedad de dicha provincia con la misma ubicación; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 28 de septiembre de 1949.

Alberto Durand. — Miguel A. Tanco. — Luis Cruz. — Pablo A. Ramella. — Osvaldo Amelotti. — Victor W. Endeiza. — F. Daniel Mendiando.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo a permutar con el gobierno de la provincia de Jujuy, una fracción de terreno de propiedad nacional, con todo lo edificado y adherido al suelo, ubicada en el suburbio Sureste de la ciudad de Jujuy, limitada al Norte por la cárcel; al Este por el camino a Tucumán, que lo separa de la vía del Ferrocarril Nacional Belgrano; al Oeste una parte con el camino vecinal, que lo separa de la propiedad Manuel Bertrés, otra parte con la cárcel mencionada, y al Sur con la propiedad de Luis Castañeda, cuya superficie total es de 99.060 metros cuadrados; por la manzana de terreno de propiedad de la mencionada provincia, ubicada en la ciudad capital de la misma, entre las calles Independencia, Gorriti, Alberti y avenida 19 de Abril.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mensaje

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1949.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de someter a consideración de vuestra honorabilidad, el presente proyecto de ley, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo, a realizar la permuta de un terreno, que el gobierno de la provincia de Jujuy donó al de la Nación, por otro de propiedad de dicha provincia, ubicado en la ciudad capital de la misma.

En el año 1941, el gobierno de la Nación inició, en el mencionado terreno, la construcción de un hospital regional, obra que fué paralizada en el año 1943, porque se consideró después de maduro examen, que la ubicación elegida para su emplazamiento —en los suburbios de la ciudad— el planeamiento general de la obra y la distribución de locales, no respondían en manera alguna a los conceptos modernos, que sobre construcciones hospitalarias están actualmente en vigencia, juzgándose que no era aconsejable, ni técnica ni económicamente, la prosecución de una obra en tales condiciones.

Por otra parte, las construcciones hospitalarias en el interior del país, que el gobierno va realizando ordenadamente, de acuerdo con el plan sanitario integral que se ha trazado, exigen la erección de un centro sanitario en la ciudad de Jujuy, motivo por el cual se ha buscado una solución adecuada y económica, que, a la vez, sea ventajosa, para el gobierno nacional y el de la provincia de Jujuy.

El edificio actualmente a medio construir, que se ha levantado en el mencionado terreno, no puede ser adaptado para instalar en él el policlínico que se proyecta y puede, en cambio, ser utilizado provechosamente por el gobierno de la provincia para instalar un asilo para ancianos y niños, solución ésta que dicho gobierno acepta, ofreciendo, en compensación, un terreno de ubicación central en la ciudad capital de la provincia, de medidas adecuadas para levantar en él un moderno centro sanitario.